

Piden coordinar combate a trata

Urge CNDH a implementar protocolos

César Martínez

Reforma Nacional. P. 3.

Lunes 30 de julio 2018

Entre las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, la descoordinación marca el combate a la trata de personas, denunciaron organizaciones civiles y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora hoy, la CNDH advirtió que no se ha armonizado en todo el país la Ley General en la materia, a pesar de que fue aprobada hace seis años.

(...)

En tanto, Iliana Ruvalcaba, presidenta de El Pozo de Vida, organización dedicada desde hace 10 años al combate de la trata, planteó que el Gobierno federal necesita más recursos y ayuda para combatir ese delito.

“Está en el Plan Nacional de Desarrollo, se supone que debe existir una partida en cada Secretaría de Estado para el combate contra la trata de personas, pero nos damos cuenta que al no cruzar su información entonces cada autoridad trabaja desde su propia trinchera y a veces los esfuerzos con muy limitados”, comentó en entrevista.

Mediante un comunicado, la CNDH también urgió al Gobierno mexicano a ratificar el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“(En el ámbito Federal) la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos aún es un reto”, agregó la Comisión. “El derecho a no ser sometido a trata de personas sigue sin ser garantizado por el Gobierno de México”.

(...).

Al respecto recordó que en 2016, 2017 y 2018 ha emitido recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a las autoridades

de Baja California Sur, San Luis Potosí y Colima, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, por las condiciones laborales de jornaleros agrícolas.

El organismo reprochó que a nivel estatal se carece de programas con indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas, estrategias de trabajo regionales, presupuestos etiquetados y, en general, de políticas dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas.